EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA Quito, 4 de mayo de 2021, a las 11:57h.
VISTOS:

EXPEDIENTE DISCIPLINARIO: MOT-1088-SNCD-2019-PC (17001-2019-0918-D).

FECHA DE INICIO DEL EXPEDIENTE: 30 de julio 2019 (fs. 44 a 45).

FECHA DE INGRESO A LA SUBDIRECCIÓN NACIONAL DE CONTROL DISCIPLINARIO: 9 de diciembre de 2019 (fs. 2 del cuadernillo de instancia).

1. SUJETOS DEL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO

1.1 Denunciantes

Abogada Daniela María Cevallos Casals, en su calidad de Procuradora Judicial de la Organización no Gubernamental Extranjera HEALTH STANDARDS ORGANIZATION y el señor Alfonso Roberto Bilbao, por sus propios y personales derechos.

1.2 Servidora judicial sumariada

Doctora Yadira Marisol Proaño Obando, por sus actuaciones como Jueza de la Unidad Judicial Penal con sede en la parroquia Ñaquito del Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha.

2. ANTECEDENTES

Mediante denuncia presentada el 10 de junio de 2019, la abogada Daniela María Cevallos Casals, en su calidad de Procuradora Judicial de la Organización no Gubernamental Extranjera HEALTH STANDARDS ORGANIZATION y el señor Alfonso Roberto Bilbao, por sus propios y personales derechos, en contra de la doctora Yadira Marisol Proaño Obando, Jueza de la Unidad Judicial Penal con sede en la parroquia Ñaquito del Distrito Metropolitano de Quito, manifestaron que la Organización no Gubernamental Extranjera HEALTH STANDARDS ORGANIZATION y el ciudadano Alfonso Roberto Bilbao Rosati, el 24 de agosto de 2018, presentaron una Acción Constitucional de Protección de Medida Cautelar en contra del Ministerio de Relaciones Exteriores, posteriormente del sorteo de ley, fue asignado a la Unidad Judicial Penal con sede en la parroquia Ñaquito del Distrito Metropolitano de Quito, con proceso 17294-2018-01316, a cargo de la doctora Yadira Marisol Proaño Obando, Jueza de la Unidad Judicial de Garantías Penales de la parroquia Ñaquito con sede en el Distrito Metropolitano de Quito; el 5 de septiembre de 2018, se llevó a cabo la audiencia pública, en la que la operadora de justicia se pronunció oralmente; sin embargo, hasta la presentación de esta denuncia esto es el 10 de junio de 2019, no se ha notificado la sentencia por escrito, por lo que presuntamente se afectó gravemente el principio de celeridad y el debido proceso, reconocidos en la Constitución de la República del Ecuador y en el Código Orgánico de la Función Judicial, produciendo un entorno de indefensión a HEALTH STANDARDS ORGANIZATION, vulnerando de esta forma sus derechos constitucionales y legales, considerando que las acciones constitucionales esencialmente buscan precautar la prontitud en el proceso; razón por la cual, a criterio de los denunciantes el actuar de la doctora Yadira Marisol Proaño Obando, Jueza de la Unidad Judicial Penal con sede en la parroquia Ñaquito del Distrito Metropolitano de Quito,

provincia de Pichincha, infringió el artículo 75¹ de la Constitución de la República del Ecuador y otros preceptos contravenidos.

El abogado Hugo Xavier Oliva Lalama, Director Provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura en el Ámbito Disciplinario (e), en mérito del informe de admisibilidad remitido por la Coordinadora de la Unidad de Control Disciplinario de Pichincha del Consejo de la Judicatura, el 30 de julio de 2019, dispuso el inicio del respectivo sumario disciplinario en contra de la doctora Yadira Marisol Proaño Obando, por sus actuaciones como Jueza de la Unidad Judicial Penal con sede en la parroquia Iñaquito del Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, ya que la prenombrada Jueza, presuntamente habría incurrido en el cometimiento de las infracciones disciplinarias tipificadas en el numeral 8 del artículo 108² y numeral 7 del artículo 109³ del Código Orgánico de la Función Judicial.

Una vez concluida la sustanciación del sumario disciplinario, mediante informe motivado de 2 de diciembre de 2019, la abogada Adriana Castillo Bustamante, Directora Provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura en el Ámbito Disciplinario, recomendó que la doctora Yadira Marisol Proaño Obando, en calidad de Jueza de la Unidad Judicial Penal con sede en la parroquia Iñaquito del Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, se le imponga la sanción de destitución por incurrir en la infracción disciplinaria tipificada en el artículo 109 numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial, esto es manifiesta negligencia.

La abogada Pamela Jacqueline Punina Proaño, Secretaria ad hoc de la Dirección Provincial de Pichincha, mediante Memorando DP17-CD-DPCD-2019-1471-M, de 9 de diciembre de 2019, remitió el expediente disciplinario 17001-2019-0918-D, junto con el mencionado informe motivado, para conocimiento del Pleno del Consejo de la Judicatura; el mismo que, fue recibido en la Subdirección Nacional de Control Disciplinario del Consejo de la Judicatura, el 9 de diciembre de 2019.

3. ANÁLISIS DE FORMA

3.1 Competencia

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 178 inciso segundo y 181 numerales 3 y 5 de la Constitución de la República del Ecuador y en el artículo 254 del Código Orgánico de la Función Judicial, el Consejo de la Judicatura es el órgano único de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial, correspondiéndole velar por la transparencia y eficiencia de los órganos que la componen. Esta potestad constitucional y legal faculta al Consejo de la Judicatura para ejercer el control disciplinario de las servidoras y los servidores de la Función Judicial, de acuerdo con los principios y reglas establecidos en el Capítulo VII del Título II del cuerpo legal antes indicado.

¹ Ref. CRE. Art. 75.- Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la ley.

² Ref. COFJ. Art. 108.- INFRACCIONES GRAVES.- A la servidora o al servidor de la Función Judicial se le podrá imponer sanción de suspensión, por las siguientes infracciones: [...] 8. No haber fundamentado debidamente sus actos administrativos, resoluciones o sentencias, según corresponda, o en general en la substanciación y resolución de las causas, haber violado los derechos y garantías constitucionales en la forma prevista en los artículos 75, 76 y 77 de la Constitución de la República.

³ Ref. COFJ. Art. 109.- INFRACCIONES GRAVISIMAS.- A la servidora o al servidor de la Función Judicial se le impondrá sanción de destitución, por las siguientes infracciones disciplinarias: [...] 7. Intervenir en las causas que debe actuar, como Juez, fiscal o defensor público, con dolo, manifiesta negligencia o error inexcusable.

El artículo 264 numerales 4 y 14 del Código Orgánico de la Función Judicial, dispone que al Pleno del Consejo de la Judicatura le corresponde velar por la transparencia y eficiencia de la Función Judicial e imponer las sanciones disciplinarias de destitución a las servidoras o los servidores judiciales.

En consecuencia, el Pleno del Consejo de la Judicatura es competente para conocer y resolver el presente sumario disciplinario en razón del informe remitido por la autoridad provincial.

Ahora bien, de la denuncia presentada por los señores Alfonso Roberto Bilbao Rosati y Daniela María Cevallos Casals en contra de la doctora Yadira Marisol Proaño Obando, por sus actuaciones como Jueza de la Unidad Judicial Penal con sede en la parroquia Iñaquito del Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, se desprende que las infracciones imputadas a la mencionada servidora sumariada, y por la cuales se inició el presente expediente disciplinario, corresponden a las contenidas en el artículo 108, numeral 8 y 109, numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial.

En ese sentido, de conformidad a lo señalado en la disposición transitoria constante en la Resolución 12-2020 por medio de la cual la Corte Nacional de Justicia del Ecuador expidió el procedimiento de declaratoria jurisdiccional previa de dolo, negligencia manifiesta o error inexcusable, que en su parte pertinente señala: “[...] *En los sumarios administrativos que actualmente se encuentren en trámite ante el Consejo de la Judicatura por quejas o denuncias que se refieran a alguna de las infracciones previstas en el artículo 109.7 del Código Orgánico de la Función Judicial, ese órgano deberá solicitar el dictamen jurisdiccional previo dispuesto en la sentencia de la Corte Constitucional No. 3-19-CN20 de 29 de julio de 2020. De no obtenerse esta declaratoria, el sumario administrativo será archivado [...]*” en concordancia con lo establecido en la disposición transitoria del Reglamento para el Ejercicio de la Potestad Disciplinaria del Consejo de la Judicatura, aprobada mediante Resolución 107-2020 expedida el 7 de octubre de 2020 por el Pleno del Consejo de la Judicatura, cuyo texto es el siguiente: “*Para aquellos procedimientos disciplinarios que se encuentren tramitando por denuncia o queja, al momento de la publicación en el Registro Oficial de la sentencia No. 3-19-CN/20 de la Corte Constitucional, el Consejo de la Judicatura solicitará, sin expresar criterio alguno, al tribunal competente la declaración jurisdiccional sobre cualquiera de las infracciones disciplinarias del artículo 109 numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial, sobre la base de lo establecido por la Corte Nacional de Justicia y la Corte Constitucional. Dicha disposición se aplicará hasta que los sumarios disciplinarios mencionados en este párrafo sean resueltos*”, el Subdirector Nacional de Control Disciplinario mediante providencia de 10 de noviembre de 2020 solicitó: “*(...) remítase atento oficio a la Sala Especializada de la Familia, Niñez, Adolescentes Infractores de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha a fin de solicitar la declaración jurisdiccional previa sobre la actuación de la servidora judicial, doctora Yadira Marisol Proaño Obando dentro del referido expediente (...)*”.

En atención a dicho requerimiento la doctora Blanca Lema Otavalo, Secretaria de la Presidencia de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, mediante Oficio 006-2021-PCPJO-BL, de 13 de enero de 2021, y recibido en la Subdirección Nacional de Control Disciplinario el 14 de enero de 2021, se remitió la declaratoria jurisdiccional previa, respecto de la actuación de la sumariada, misma que en su parte pertinente señala: “[...] *en el presente expediente disciplinario cual es que en caso de que de OFICIO el Consejo de la Judicatura haya aperturado el sumario administrativo bajo la tipificación constante en el artículo 109, número 7 del Código Orgánico de la Función Judicial, ya*

que se insiste que la denuncia no plantea infracción disciplinaria alguna imputable a la citada servidora judicial-más allá que en su formalización alude lo prescrito en el artículo 108, número 8 ibídem-, lo que corresponde es aplicar lo preceptuado en la resolución No. 13-2020, que: "Art. 4A.- La o el Presidente de la Corte Nacional de Justicia y las o los Presidentes de las Cortes Provinciales de Justicia inadmitirán liminarmente las peticiones de declaración jurisdiccional previa remitidas por el Consejo de la Judicatura dentro de los expedientes disciplinarios iniciados de oficio por infracciones contenidas en el artículo 109.7 del Código Orgánico de la Función Judicial, por falta de competencia del órgano administrativo. Asimismo, por falta de competencia del órgano jurisdiccional, se inadmitirán liminarmente las solicitudes de declaración jurisdiccional previa presentadas dentro de expedientes disciplinarios que se sustenten en infracciones distintas a las previstas en el artículo 109.7 del Código Orgánico de la Función Judicial".

De lo expuesto en los párrafos que anteceden, se determina que en el presente expediente los Jueces de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial, y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha determinaron que las actuaciones de la servidora judicial sumariada no se subsumen en la falta disciplinaria imputada en el auto de inicio, esto es en el artículo 109, numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial, requisito necesario de procedibilidad para poder determinar responsabilidad administrativa; motivo por el cual, devendría en pertinente el archivo del presente sumario disciplinario respecto a dicha falta disciplinaria.

Por lo tanto, el Pleno del Consejo de la Judicatura es competente para conocer y resolver el presente sumario disciplinario iniciado en contra de la servidora judicial sumariada doctora Yadira Marisol Proaño Obando, por sus actuaciones como Jueza de la Unidad Judicial Penal con sede en la parroquia Iñaquito del Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, únicamente respecto a la infracción disciplinaria prevista en el artículo 108, numeral 8 del Código Orgánico de la Función Judicial, conforme así se lo declara

3.2 Validez del procedimiento administrativo

El artículo 76 numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone que a toda autoridad administrativa o judicial le corresponde garantizar el cumplimiento de las normas y los derechos de las partes.

En cumplimiento a dicha disposición se advierte que a la doctora Yadira Marisol Proaño Obando, Jueza de la Unidad Judicial Penal con sede en la parroquia Iñaquito del Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, fue citada en legal y debida forma con el auto de apertura del sumario el 19 de agosto de 2019, conforme consta de la razón sentada por el señor Rodney Francisco Proaño Hualpa, Citador de la Dirección Provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura en el Ámbito Disciplinario (fs. 52).

Asimismo, se le ha concedido a la servidora sumariada el tiempo suficiente para que pueda preparar su defensa, ejercerla de manera efectiva, presentar las pruebas de descargo y contradecir las presentadas en su contra; en definitiva, se han respetado todas y cada una de las garantías del debido proceso reconocidas en el artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador, bajo el título de derechos de protección; por lo tanto, al no haberse incurrido en violación de ninguna solemnidad, se declara la validez del presente sumario administrativo.

3.3 Legitimación activa

El artículo 113 del Código Orgánico de la Función Judicial dispone que la acción disciplinaria se ejercerá de oficio, por queja o denuncia.

El artículo 114 inciso segundo del Código Orgánico de la Función Judicial, establece que los sumarios disciplinarios se iniciarán por denuncia presentada por cualquier persona, grupo de personas, pueblo o nacionalidad.

En el presente caso, los hechos presuntamente constitutivos de infracción disciplinaria, llegaron a conocimiento del abogado Hugo Xavier Oliva Lalama, Director Provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura en el Ámbito Disciplinario, a través de la denuncia presentada el 10 de junio de 2019, por parte de la abogada Daniela María Cevallos Casals en su calidad de Procuradora Judicial de la Organización no Gubernamental Extranjera HEALTH STANDARDS ORGANIZATION y el señor Alfonso Roberto Bilbao, por sus propios y personales derechos, en contra de la doctora Yadira Marisol Proaño Obando, por sus actuaciones como Jueza de la Unidad Judicial Penal con sede en la parroquia Ñaquito del Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, dentro del juicio 17294-2018-01316, por acción constitucional de medida cautelar.

Por lo tanto, el abogado Hugo Xavier Oliva Lalama, Director Provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura en el Ámbito Disciplinario (e), contó con legitimación activa para ejercer la acción disciplinaria.

4. TIPIFICACIÓN DE LA PRESUNTA FALTA DISCIPLINARIA

En el auto de inicio dictado el 30 de julio de 2019, el abogado Hugo Xavier Oliva Lalama, Director Provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura en el Ámbito Disciplinario, consideró que la doctora Yadira Marisol Proaño Obando, por sus actuaciones como Jueza de la Unidad Judicial Penal con sede en la parroquia Ñaquito del Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, presuntamente habría incurrido en las infracciones disciplinarias tipificadas y sancionadas en el numeral 8⁴ del artículo 108 y numeral 7⁵ del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial.

No obstante de aquello, como se manifestó en el punto 3.1 de la presente resolución, únicamente se procederá al análisis respecto de la infracción disciplinaria tipificada y sancionada en el artículo 108, numeral 8 del Código Orgánico de la Función Judicial.

5. OPORTUNIDAD EN EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN

El numeral 2 del artículo 106 del Código Orgánico de la Función Judicial, establece que la acción disciplinaria por las infracciones susceptibles de sanción de suspensión de funciones sin goce de remuneración en el plazo de sesenta días. Asimismo, en los incisos segundo y tercero *ibíd.*, se establece que, los plazos de prescripción de la acción disciplinaria se contarán en el caso de queja o

⁴ Ref.- “Art. 108.- *INFRACCIONES GRAVES.*- A la servidora o al servidor de la Función Judicial se le podrá imponer sanción de suspensión, por las siguientes infracciones: [...] 8. [...] haber violado los derechos y garantías constitucionales en la forma prevista en los artículos 75, 76 y 77 de la Constitución de la República”.

⁵ Ref.- “Art. 109.- *INFRACCIONES GRAVISIMAS.*- A la servidora o al servidor de la Función Judicial se le impondrá sanción de destitución, por las siguientes infracciones disciplinarias: [...] 7. Intervenir en las causas que debe actuar, como Juez, fiscal o defensor público, con dolo, manifiesta negligencia o error inexcusable”.

denuncia desde que se cometió la infracción; que la iniciación del proceso disciplinario interrumpe la prescripción hasta por un año; y que, vencido este plazo la acción disciplinaria prescribe definitivamente.

En el caso materia de la presente resolución, respecto a las presuntas infracciones disciplinarias inculpadas a la doctora Yadira Marisol Proaño Obando, por sus actuaciones como Jueza de la Unidad Judicial Penal con sede en la parroquia Ñaquito del Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, llegó a conocimiento del abogado Hugo Xavier Oliva Lalama, Director Provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura en el Ámbito Disciplinario (e), a través de la denuncia presentada por la abogada Daniela María Cevallos Casals y el señor Alfonso Roberto Bilbao, el 10 de junio de 2019; y, la autoridad provincial dispuso la apertura del respectivo sumario disciplinario el 30 de julio de 2019, al presumir la comisión de la infracción disciplinaria tipificada en el artículo 108, numeral 8 del Código Orgánico de la Función Judicial.

Ahora bien, con respecto a lo establecido en el inciso último del artículo 106 del Código Orgánico de la Función Judicial, el presente expediente disciplinario se inició el 30 de julio de 2019.

Es importante señalar que el Pleno del Consejo de la Judicatura, mediante Resolución 030-2020, en su artículo 1, resolvió suspender los plazos y términos que se encuentran decurriendo en los procedimientos disciplinarios que son sustanciados por la Subdirección Nacional de Control Disciplinario y en las Direcciones Provinciales, a partir del 17 de marzo de 2020, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 1 y 8 del Decreto Ejecutivo No. 1017 expedido por el Presidente Constitucional de la República del Ecuador el 16 de marzo de 2020, mediante el cual se declaró el estado de excepción por calamidad pública en todo el territorio nacional ante la declaratoria de pandemia de SARS-COV-2 por parte de la Organización Mundial de la Salud; y, en ese sentido, se dispuso a todas las Funciones del Estado la emisión de las resoluciones necesarias para que proceda la suspensión de los términos y plazos a los que haya lugar, en procesos judiciales y administrativos. Posteriormente, el Pleno del Consejo de la Judicatura, mediante Resolución 058-2020, vigente desde el 8 de junio de 2020, dispuso derogar la Resolución 030-2020.

El 21 de julio de 2020 el Pleno del Consejo de la Judicatura emitió la Resolución 081-2020, en cuyo artículo 1 resolvió lo siguiente: “*Suspensión de plazos y términos para la sustanciación y resolución de procedimientos disciplinarios.- Suspender los plazos y términos que se encuentran decurriendo en los procedimientos disciplinarios del Consejo de la Judicatura que son sustanciados por la Subdirección Nacional de Control Disciplinario y por las Direcciones Provinciales del Consejo de la Judicatura, a nivel nacional. (...)*”, disposición que fue derogada mediante Resolución 108-2020, vigente desde el 12 de octubre de 2020.

Por otra parte, la Subdirección Nacional de Control Disciplinario solicitó a la Sala Especializada de la Familia, Niñez, Adolescencia y Adolescentes Infractores de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha que emita de ser el caso la correspondiente declaratoria jurisdiccional previa, mediante providencia de 10 de noviembre de 2020, de acuerdo a la disposición transitoria constante en la Resolución 12-2020 por medio de la cual la Corte Nacional de Justicia del Ecuador expidió el procedimiento de declaratoria jurisdiccional previa de dolo, negligencia manifiesta o error inexcusable, que en su parte pertinente señala: “[...] *En los sumarios administrativos que actualmente se encuentren en trámite ante el Consejo de la Judicatura por quejas o denuncias que se refieran a alguna de las infracciones previstas en el artículo 109.7 del Código Orgánico de la Función Judicial, ese órgano deberá solicitar el dictamen jurisdiccional previo dispuesto en la*

sentencia de la Corte Constitucional No. 3-19-CN20 de 29 de julio de 2020. De no obtenerse esta declaratoria, el sumario administrativo será archivado [...]”.

El 14 de enero de 2021, llegó a conocimiento de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario del Consejo de la Judicatura, el Oficio 006-2021-PCPJP-BL de 13 de enero de 2021, suscrito por la doctora Blanca Lema Otavalo, Secretaria de la Presidencia de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, en el cual pone en conocimiento la declaratoria jurisdiccional, en la cual, los Jueces de la Sala Especializada de la Familia, Niñez, Adolescencia y Adolescentes Infractores de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, inadmitieron liminarmente la petición remitida por el Consejo de la Judicatura, dentro de los expedientes disciplinarios iniciados de oficio por la infracciones previstas en el artículo 109, numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial, cabe indicar que dicha declaratoria fue recibida en la Subdirección Nacional de Control Disciplinario el 14 de enero de 2021.

En ese contexto, al haberse iniciado el presente sumario administrativo el 30 de julio de 2019 y suspendido los plazos de prescripción de la acción desde el 17 de marzo hasta el 7 de junio de 2020 y nuevamente desde el 22 de julio hasta el 11 de octubre de 2020, se determina que la fecha de prescripción del presente expediente disciplinario es el 11 de enero de 2021; sin embargo, este órgano administrativo solicitó dicha declaratoria jurisdiccional la misma que fue en cumplimiento a lo dispuesto en sentencia de la Corte Constitucional que estableció que en los procedimientos disciplinarios que se encuentren tramitando por denuncia o queja, al momento de la publicación en el Registro Oficial de la sentencia No. 3-19-CN/20 de la Corte Constitucional, el Consejo de la Judicatura solicitará, sin expresar criterio alguno, al tribunal competente la declaración jurisdiccional sobre cualquiera de las infracciones disciplinarias del artículo 109 numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial, sobre la base de lo establecido por la Corte Nacional de Justicia y la Corte Constitucional, siendo recibida dicha declaratoria el 14 de enero de 2021; por lo tanto hasta la presente fecha ha transcurrido más de un (1) año que establece el inciso último del artículo 106 del Código Orgánico de la Función Judicial, en consecuencia la acción disciplinaria se encuentra definitivamente prescrita en virtud del cumplimiento a la sentencia 3-19 CC de la Corte Constitucional.

6. PARTE RESOLUTIVA

En mérito de las consideraciones expuestas, **EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA, POR UNANIMIDAD** resuelve:

6.1 Declarar la prescripción de la acción disciplinaria dentro del presente expediente MOT-1088-SNCD-2010-PC (17001-2019-0918-D), en cuanto a la presunta infracción tipificada y sancionada en el artículo 108, numeral 8 del Código Orgánico de la Función Judicial.

6.2 Disponer el archivo del presente expediente disciplinario, por la presunta infracción disciplinaria establecida en el numeral 7 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial, en virtud de lo determinado en la sentencia No. 3-19 CN/20 emitida por la Corte Constitucional del Ecuador.

6.3 Actúe la Secretaría de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario.

Notifíquese y cúmplase.

**Dra. María del Carmen Maldonado Sánchez
Presidenta del Consejo de la Judicatura**

**Mgs. Xavier Alberto Muñoz Intriago
Vocal del Consejo de la Judicatura**

**Esp. Elcy Rumania Celi Loaiza
Vocal del Consejo de la Judicatura**

**Dr. Juan José Morillo Velasco
Vocal del Consejo de la Judicatura**

**Dra. Ruth Maribel Barreno Velin
Vocal del Consejo de la Judicatura**

CERTIFICO: que en sesión de 4 de mayo de 2021, el Pleno del Consejo de la Judicatura, por unanimidad, aprobó esta resolución.

**Mgs. María Auxiliadora Zamora Barberán
Secretaria General
del Consejo de la Judicatura**